PAPELES DE COMERCIO. Mora. Costas. Requerimiento de pago.

1. Aunque se trate de obligaciones a plazo y exigibles, en el caso de de los papeles de comercio, el requerimiento judicial o extrajudicial sigue siendo —pese al art. 509 CC.— la única forma idónea de constituir en mora al deudor.*

2. Dado que los títulos de crédito están destinados a circular y siendo naturalmente abstractos y literales, el pago sólo puede hacer válidamente contra la presentación del documento.

3. Lo dispuesto en el art. 45 de la ley cambiaria que norma lo relativo al depósito del importe en poder de autoridad competente, debe entenderse como una facultad del portador que puede o no usar y no como un deber u obligación, cuya omisión pueda generar responsabilidades en su contra.

4. Si se trata de acción directa, los intereses se deben desde la constitución en mora —o sea desde el requerimiento de pago— y no desde el vencimiento del pagaré.

5. Si el actor pidió sin derecho la condenación en costas e intereses del demandado —en el caso, no había sido constituido en mora—, él debe cargar con los gastos originados por la controversia, tomándose como base para la regulación, sólo el importe de lo que se discutía, es decir, las costas.

Derudi, Carlos Hugo c. Crespi, Dante

Rosario, agosto 29 de 1974. A la cuestión de si es justa la sentencia apelada, el Vocal doctor **Alvarado Velloso** dijo: Contra la resolución que estima la pretensión del actor, se agravia el demandado con argumentos que, a mi juicio resultan atendibles. En efecto, con respecto a la condenación en intereses y costas, entiendo que la queja del demandado es procedente.

I. En casos como el presente, los intereses se deben desde el vencimiento del pagaré; pero este principio no rige cuando se trata de acción

* En el caso, el actor inició medidas preparatorias de juicio ejecutivo por cobro de un pagaré sin probar el requerimiento previo hecho al deudor. Cuando éste compareció para el reconocimiento de firma —vale decir, en la primera oportunidad que tuvo— se allanó y consignó judicialmente el importe. El Tribunal entendió, acertadamente, que no correspondía —dada la falta de constitución en mora—, que el demandado cargara con los intereses. CELSUS.

directa y nunca se reclamó el pago por el portador al obligado principal. Ello por lo siguiente:

1.1. En rigor, el fondo de la cuestión litigiosa consiste en determinar si el deudor se hallaba o no en mora al momento de iniciadas las medidas preparatorias. Entiendo que no. Y ello porque, a pesar de la enfática enunciación del A. 509 Ref. D. Ley 17.711, elementales principios de lógica enervan la premisa de la mora automática en el caso de las obligaciones cartulares.

En efecto, a poco que se analice la norma legal y su aplicación al caso concreto, se concluirá que el requerimiento del acreedor se erige en pieza fundamental dentro del mecanismo del cumplimiento de las obligaciones cambiarias y que no puede ser obviado de manera alguna, so pretexto de conferirse al A. 509 un alcance absoluto y axiomático.

El texto anterior a la reforma de 1968, sentaba el principio correcto de la necesaria interpelación, y luego enumeraba las excepciones. Con prescindencia de las loables motivaciones que pudo tener el legislador al introducir la innovación de la llamada "mora automática", creo que la norma —de técnica defectuosa— vino a introducir graves confusiones, al menos cuando se intenta su aplicación indiscriminada.

Y es precisamente en el caso de los papeles de comercio donde se ve con claridad que, a pesar de tratarse de obligaciones a plazo y exigibles, el requerimiento judicial o extrajudicial sigue siendo la única forma idónea de constitución en mora del deudor. Ello porque estando los títulos de crédito, por esencia, destinados a circular, y siendo naturalmente abstractos y literales, el pago sólo puede hacerse válidamente contra la presentación del documento.

Parece obvio entonces, que el deudor que libra un pagaré y que, actuando con absoluta diligencia y buena fe, quiere pagar el día mismo del vencimiento, no tiene otra alternativa que esperar que el documento le sea presentado al cobro en su domicilio (A. 41, 1º, D. Ley 5965/63). No puede pretenderse que sea él quien salga en rescate del título, pues sería imponerle una actividad ingenua y caprichosa —las más de las veces, totalmente infructuosa— ya que él no puede razonablemente saber en monas de quién se encuentra el documento.

En este orden de ideas, los comercialistas se han visto precisados a inventar la figura de la "colaboración del acreedor", que no es sino una imagen híbridamente novedosa del clásico requerimiento de pago en el domicilio del deudor, el cual encuadra perfectamente dentro de los principios que rigen el cumplimiento de las obligaciones.

A tal punto es esto exacto, que quien no paga en las condiciones señaladas —vale decir, contra la presentación del documento— paga mal y ese pago no puede imputarse válidamente a la cancelación de su obligación cambiaria.

Por lo demás, todos estos razonamientos encuadran fácilmente en la norma contenida en el A. 509, ya que en su párrafo final dice que "para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable". Y aquí, la inimputabilidad del retardo se deduce con claridad, pues ninguna culpa tuvo el deudor: su omisión de pago es inexorable consecuencia de la omisión del acreedor de presentarle el documento en su domicilio.

En el caso no se ha probado la actividad del actor, tendiente al cobro de su crédito. Por el contrario, la afirmación del demandado de que la citación para el reconocimiento de la documental fue la primera intimación de pago, ya que el pagaré nunca fue presentado a su domicilio (Fs. 10), no resulta enervada por prueba alguna en contrario y por tanto, debe tenerse

como exacta. Ergo, el depósito en autos fue tempestivo y lo libera de intereses.

1.2. Consideración especial merece la norma contenida en el A. 45 de la ley cambiaria que establece que “si la letra de cambio no se presentara para el pago en el término fijado en el A. 40, cualquier deudor tiene la facultad de depositar su importe en poder de la autoridad competente a costa, riesgo y peligro del portador del título”. Obviamente se trata de una facultad que puede o no usar. No podría nunca pensarse que es un deber o una obligación cuya omisión genere responsabilidades en su contra, pues ello implicaría exigir una exagerada diligencia del deudor a la par que admitir la más absoluta inercia del acreedor en el cuidado de sus propios intereses.

2. Respecto de las costas, por las peculiares modalidades del sub examen, haré unas breves consideraciones:

2.1. A fs. 10 v. el demandado pide eximición de ellas; solicitud que que debe entenderse en el sentido de que se lo libere de la “condena” en costas (ver la cita allí formulada: a. 251, inc. 2º, C. P. C.), y por tanto admite pagar las suyas.

2.2. Congruente con lo expuesto ut supra respecto de la inexistencia de mora, entiendo que hasta tal momento es de estricta aplicación el a. 250, C. P. C. por ausencia de los presupuestos que la ley prevé para dejar sin efecto el principio general contenido en esa norma de que “cada litigante carga con sus costas”.

2.3. Pero es de advertir que a partir del escrito de fs. 11, al pedir el actor —sin derecho— la condena en costas e intereses, debe cargar con todos los gastos de la controversia que se originó en torno a su pedido.

2.4. Resumiendo: hasta el escrito de fs. 11, no había vencido y las costas deben ser por su orden (a. 250, C. P. C.). De allí en más, el actor cargará con todas ellas, pero tomando como base de la regulación el importe de lo que se discutía —sólo lo relativo a costas— que naturalmente resulta muy inferior al monto total del pleito. Voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijo el Vocal doctor **Isacchi**: compartiendo los fundamentos expuestos por el Vocal proopinante, adhiero al voto que antecede.

A la misma cuestión, dijo el Vocal doctor **Casiello**: Coincido con el voto del doctor Alvarado Velloso en que atento la situación que se ha planteado en autos, no debe pagar el subscriptor del pagaré los intereses debidos desde el vencimiento. En efecto: como ya dijera in re “Rodríguez c. Alegre” (v. Protocolo de Sentencias de esta Sala, año 1972, folios 425 y ss.), el D. Ley 5965/63 acepta plenamente el rigor cambialis; pero “rige este mismo principio —intereses— o sea, mora automática a partir del vencimiento, en la acción directa cuando nunca se reclamó el pago amigable por el portador al obligado principal?” se pregunta Cámara (Letra de Cambio..., t. III, p. 276) y responde: “No... pues en esta hipótesis hay mora creditoris... (y) a quién compete la prueba de la inercia del portador? En este caso corresponde al portador demostrar su reclamo infructuoso”.

Con respecto a la distribución de costas, entiendo que los razonamientos formulados sub 2, resultan de una lógica impecable. Voto por la negativa.

Con lo que terminó el Acuerdo y atento los fundamentos y conclusiones del mismo, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, **resuelve** desestimar el recurso de nulidad, revocar la sentencia de fs. 16 y, en su lugar, tener por bien efectuado el pago realizado, con carácter cancelatorio de la deuda instrumentada en el documento que origina estos obrados. Hasta el escrito de fs. 11, costas por su orden, y a partir de allí —en ambas instancias a la actora. — **Adolfo Alvarado Velloso** — **Isacchi** — **Casiello** —